

Calviño se revuelve contra Iglesias por la enmienda de los desahucios

CRÍTICAS/ Los socialistas evidencian su malestar con el líder de Podemos. Calviño le acusa de buscar “visibilidad” y de generar “conflicto” y Ábalos le recuerda que ya hay un pacto en materia de vivienda.

J. Díaz. Madrid

Pablo Iglesias sigue empeñado en hacer oposición al Gobierno del que es vicepresidente segundo y en utilizar su posición institucional como caja de resonancia de sus guiños populistas. El líder de Podemos ha provocado un nuevo encontronazo, el enésimo, en el Ejecutivo de coalición al aliarse con ERC y Bildu para enmendar su propio proyecto de Presupuestos con el fin de incluir el veto a los desahucios y al corte de suministros básicos hasta finales de 2022. Una maniobra que ha levantado ampollas entre sus socios socialistas, que desconocían la iniciativa del *tripartito*, y contra la que ayer se revolvió la vicepresidenta económica.

Nadia Calviño, que no ocultó que se sentiría “más cómoda con el apoyo del PP” a las cuentas públicas, criticó públicamente la actitud del partido morado, al que acusó de buscar protagonismo político. “En estos dos años y medio que llevo en España veo acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio”, afirmó en una entrevista radiofónica la vicepresidenta, quien también reprochó al partido de Iglesias que provoque disputas innecesarias. “No veo preciso plantear aquí como una especie de conflicto cuando yo creo que estamos todos de acuerdo con que hay que pro-



Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, y Nadia Calviño, vicepresidenta económica, la semana pasada en el Congreso.

teger a las personas vulnerables y que hay que evitar desahucios de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional”.

Seguridad jurídica

Eso sí, Calviño, que restó importancia a cómo se percibe en Europa el posible apoyo de Bildu a los Presupuestos (eso en Bruselas “no importa” siempre que las cuentas salgan adelante, vino a decir), añadió un matiz esencial. Frente al intervencionismo sin tapujos que defienden Podemos y sus aliados separatistas vascos y catalanes, la vicepresidenta enfatizó la necesi-

dad de conjugar esa atención a los colectivos más desfavorecidos con la protección “también de la seguridad jurídica”. Un mensaje crucial para los mercados y la inversión, que asisten con inquietud a la creciente deriva del Gobierno hacia una política económica cada vez más ideologizada y de marcado tinte populista.

Preocupación que declaraciones como las de Iglesias de ayer no hacen más que acrecentar. “La paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo”, escribió ayer en Twitter el vicepresidente segundo,

quien advirtió a sus detractores de que “a nosotros no nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias. Gobernar es eso”, sentenció. De hecho, lejos de retractarse, Podemos ahondó ayer en la herida pactando con ERC y la CUP una enmienda transaccional para frenar todo desahucio y regular los alquileres.

Al igual que Calviño, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también desconocía la enmienda conjunta de Podemos, ERC y Bildu y, según admitió, “tampoco la

esperaba”. El número tres del PSOE recordó a sus socios morados que “tenemos un acuerdo con Unidas Podemos, que se trató con los distintos equipos del ministerio y de la vicepresidencia segunda, y concluimos en un documento que se conoce y es la posición que asumimos como Gobierno”, afirmó Ábalos en referencia a la futura Ley de la Vivienda pactada entre ambos partidos. Un texto que, de hecho, ya tensionó al máximo las relaciones entre Podemos y PSOE en vísperas de la aprobación del proyecto presupuestario al amenazar los morados con dinamitar su luz

La secretaria general de los socialistas vascos acusa a Podemos de “no saber ser Gobierno”

verde si no se escenificaba un acuerdo para regular los precios del alquiler.

Mucho más dura fue la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, que acusó a Podemos de “no sabe ser ni Gobierno, ni Gobierno de coalición”.

Choques constantes

Los choques entre el ala morada del Gobierno y los ministros moderados del flanco socialista han sido constantes desde el inicio de la legislatura, aunque se han agudizado en los últimos meses a medida que Iglesias ha visto afianzado su matrimonio de conveniencia con Sánchez. Ambos se necesitan para continuar en el poder.

Así, además de los roces intermitentes entre los ministros de los dos partidos por la contrarreforma laboral o la intervención de los precios del alquiler, a la que se opone Calviño por considerar que no resolverá los problemas de vivienda, Iglesias protagonizó otro sonoro encontronazo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a cuenta de la renta mínima, medida estrella del Gobierno cuyos réditos políticos intentó acaparar el líder de Podemos.

El nuevo gesto de presión de Iglesias ha hecho más profundas las grietas en el Gobierno de coalición y se enmarca en sus esfuerzos para enfocar la negociación presupuestaria en el bloque de investidura descabalgando a Cs del proceso e imponiéndose así a los ministros socialistas moderados.

Permiso para los padres con hijos en cuarentena

M. Valverde. Madrid

El Gobierno negociará con la patronal y los sindicatos la posibilidad de que puedan tener un permiso retribuido los padres que tengan que cuidar de sus hijos, cuando éstos tengan que guardar cuarentena por haber estado en contacto con alguien, como un compañero de colegio, por ejemplo, que haya resultado afectado por el coronavirus o que forme parte de una cadena de presuntos contagios. Es decir, no cuando el hijo esté enfermo, sino cuando haya que comprobar si éste ha resultado contagiado por un brote o una relación indivi-

dual. O incluso que haya estado en contacto con alguien que, a su vez, se ha relacionado con un contagiado.

Es el caso de muchos padres que ahora tienen que pedir permiso en el trabajo, o acogerse al *Plan Mecuida*, que puso en marcha el Gobierno en el primer Real Decreto del 17 de marzo de 2020, de medidas urgentes de política económica y social para hacer frente al coronavirus. En el mismo, los trabajadores tiene derecho a reducir la jornada, o a adaptarla con flexibilidad y a ser posible, con el acuerdo de la empresa, cuando tienen que cuidar del

cónyuge, o la pareja, o un hijo afectado por el coronavirus. La reducción de la jornada lleva consigo la consiguiente reducción del salario.

Al principio de la epidemia, Escrivá anunció con mucha alegría el permiso retribuido para los trabajadores en estas circunstancias, pero después dio marcha atrás ante la dificultad de acotar los casos y, por tanto, otra vía más para

El Gobierno quiere abordar el permiso retribuido con la patronal y los sindicatos

incrementar el gasto de la Seguridad Social. Sin embargo, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, explicó que el Gobierno va a tratar este permiso retribuido de los padres y madres en estos casos, “en el marco del diálogo social y también con la intervención del Ministerio de Sanidad”. “Es una medida demasiado compleja como para hablar apresuradamente de ella”. Arroyo argumentó que la casuística puede derivar “en la baja de una persona que ha estado en

contacto con alguien que a su vez ha estado en contacto con un contagiado”. Entre otros lugares, eso puede ocurrir en los colegios. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció ayer, también en el Congreso, que el Gobierno va a transponer una directiva europea aprobada en 2019 sobre conciliación, “en la que se exige un permiso laboral parcial para los trabajadores que tengan que cuidar de familiares”. No obstante, advirtió de que “la corresponsabilidad es mucho más que los permisos para los padres con hijos en cuarentena preventiva”.



Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.